

ndo así aclarado el verda-
o que el constituyente atri-
na cuya aplicación se ha
stos antecedentes, corre-
si la sentencia condenato-
instancia dictada por el
luzgado de Letras de Quil-
eso Rol N° 49.504 -tenido
fecha 5 de julio de 1991-
de esa causa, se halla o
ser declarada injustifica-
a o arbitraria;

caso en estudio, el recu-
n síntesis, que el fallo de
condenatorio de su repre-
manifiestamente erróneo
er lugar, en la situación
de apreciarse la prueba
mo lo hizo el juez de la
ésta está sometida al sis-
mo de prueba tasada o
n cuanto a la existencia
medios probatorios que
eso, éstos se limitan a las
los carabineros presun-
os -que como testimonio
obatorio alguno atendida
lidad que les afecta con-
uesto en el artículo 460
de Procedimiento Penal
is, ellas se contraponen
nes enfáticas del proce-
ce que tampoco reúnan
gidos por el artículo 488
o para las presunciones
eclaraciones de la testi-
a Beretta, quien no ha-
la detención ni los pre-
ofensas a los carabine-
la orden de investigar
a Policía de Investiga-
porta al establecimien-
pues sólo reproduce la
de los carabineros ofen-
afirma, es insuficiente
blecido tanto el hecho
rticipación culpable del
que al condenar a su
ez sentenciador incu-
njustificado que hace
njación solicitada pues,
e Apelaciones de Val-

paraíso, con los mismos antecedentes, lo
absolvió de la acusación deducida en su
contra;

7° Que, como puede verse, el reproche
principal que se hace a la sentencia con-
denatoria de primera instancia es el que,
a juicio del recurrente, se le habría con-
denado existiendo pruebas insuficientes
para dar por establecidos los fundamen-
tos básicos del proceso penal, esto es, el
hecho punible y la participación culpable,
y también la forma en que ésta se habría
apreciado y ponderado por el sentencian-
dor -en conciencia y no de acuerdo a las
reglas de la prueba tasada- lo que, tam-
bién a su entender, constituiría un error
injustificado, lo que se ratifica al ser sub-
sanado por la sentencia revocatoria de se-
gunda instancia;

8° Que de la simple lectura de los an-
tecedentes del proceso penal tenido a la
vista aparece que efectivamente los me-
dios de prueba que consigna la sentencia
de primer grado son los mismos que con-
sidera la de segunda instancia y que, por
cierto, están de acuerdo con el mérito del
proceso, desde que ellos son parte de él.
Lo que sí sucede -y de allí surge la dife-
rente decisión de ambos estadios procesa-
les- es que los respectivos jueces hicieron
una diferente ponderación de aquellos
medios de prueba y, al primero, le pare-
cieron suficientes para condenar y, a los
segundos, no idóneos para dar por acredi-
tado el hecho punible y por tanto bastan-
tes para absolver al acusado, dando, en
su motivo segundo, el carácter de meras
presunciones o indicios -aunque no sufi-
cientes para hacer plena prueba- a las
declaraciones de los carabineros ofendi-
dos, carácter que, por su parte, el fallo de
primera instancia también le había atri-
buido en su considerando quinto;

9° Que precisamente aquella circuns-
tancia -la coincidencia en cuanto a la exis-
tencia de medios probatorios- hace que
la diferencia sustancial en la decisión se
centre sólo en la distinta ponderación que
los jueces hacen de ellos, lo cual repre-
senta esencialmente el ejercicio de la fa-

cultad jurisdiccional de que están investi-
dos los jueces y su apreciación contraria
-aún la errónea- excluye, en primer lugar,
terminantemente la arbitrariedad y tam-
bién la posibilidad de que esa sentencia
sea calificada como de injustificadamente
errónea, en los términos a que se refiere la
norma constitucional en estudio, pues es
esa eventualidad la que justifica el princi-
pio de la doble instancia y de la revisión de
legalidad -vía casación- que impera en
nuestro sistema jurídico nacional;

10° Que por las razones antes dadas,
esta Corte Suprema no comparte el crite-
rio sustentado por el Ministerio Público
en su Dictamen de fs. 25;

Por estas consideraciones y visto, ade-
más, lo dispuesto en el artículo 19 N° 7
letra i) de la Constitución Política de la
República y Auto Acordado de este Tribu-
nal de 3 de agosto de 1983, se declara
que se niega lugar a hacer la declaración
solicitada por don Carlos Héctor Verdejo
Galleguillos en lo principal de su solici-
tud de fs. 14.

Devuélvase el expediente tenido a la
vista.

Regístrese y archívese.
N° 28.844.

Pronunciada por el Presidente subr.
don Servando Jordán L., y los Ministros
señores Enrique Zurita C., Roberto Dávi-
la D., Lionel Beraud P., Arnaldo Toro L.,
Efrén Araya V., Germán Valenzuela E.,
Hernán Álvarez G., Adolfo Bañados C.,
Oscar Carrasco A., Luis Correa B., Mario
Garrido M. y Víctor Hernández R.

Corte Suprema, 19 de mayo de 1993

Tunis König, Teresa y otros
(recurso de inaplicabilidad)

DL N° 2.695, de 1979 (arts. 2° N° 2, 4°
inc. 3°, 15, 16, 26, 28 y 29) - Constitución
Política de la República: art. 19 N° 24 -
Juicio de reivindicación de inmueble (ges-
tión pendiente) - Recurso de inaplicabili-

+ Simposio 1993

I 125

dad (art. 80 de la Constitución) - Suspensión del procedimiento - Derecho de propiedad sobre bienes inmuebles - Materia de reserva legal - Afectación del contenido esencial del derecho de propiedad (art. 19 N° 26 de la Constitución) - Garantía de la posesión inscrita - Presunción de dominio - Privación del derecho de propiedad sin expropiación previa (causal no prevista en la Constitución) - Posesión material de bienes inmuebles - Saneamiento del dominio sobre la pequeña propiedad raíz - Ordenamiento legal destinado a privar de dominio sobre propiedad inscrita (inconstitucionalidad) - Votos en contra - Indicación previa (rechazada/inadmisibilidad del recurso por tratarse de derogación tácita de leyes anteriores a vigencia de la Constitución).

DOCTRINA: Los artículos 2° N° 2, 4° inciso 3°, 15, 16, 26, 28 y 29 del DL N° 2.695, de 1979, que configuran una legislación especial de regularización de la pequeña propiedad raíz, no sólo abrogan las normas sobre posesión y dominio establecidos en el Código Civil, suprimiendo las garantías de la posesión inscrita que constituye presunción de dominio y que son la base de la actual organización social y económica del país, sino que contravienen el artículo 19 N° 24 de la Constitución, ya que permiten que el titular de un derecho de propiedad sobre un bien raíz legalmente inscrito a su favor sea privado de lo suyo sin expropiación previa y en beneficio de otro que sólo detenta su posesión material.

La referida contradicción con la disposición del artículo 19 N° 24 de la Constitución no sólo está patente en relación con los preceptos indicados sino que alcanza también al DL N° 2.695/79 en su contexto general, como se advierte de las propias declaraciones preliminares que motivaron su dictación.

El DL N° 2.695, de 1979, ha creado un sistema tanto de carácter sustantivo como procesal cuyos objetivos y efectos conducen inequívocamente a privar de su dominio, constitucionalmente garantizado, al titular de este derecho sobre su propiedad debidamente inscrita.

No obsta para acoger un recurso de inaplicabilidad el que el recurrente haya planteado como petición principal la inaplicabilidad total del DL N° 2.695/79 y en subsidio la de las normas precisas que se han analizado, pues de igual forma se ha cumplido con la exigencia de admisibilidad contenida en el artículo 80 de la Constitución que señala que la Corte Suprema podrá declarar inaplicable para casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución.*

LA CORTE

Vistos:

Don Marcos Dávila Letelier, abogado, domiciliado en calle Huérfanos N° 1117 oficina 717, en representación, según mandato que acompaña, de Teresa Tunis König, Alberto Tunis, Miguel Schoj y Daniel Schoj, todos miembros de la sucesión quedada al fallecimiento de su padre don Moisés Tunis Horowitz, todos comerciantes de su mismo domicilio, ha deducido recurso de inaplicabilidad para que se declare que en el juicio ordinario Rol N° 2771-91 del Noveno Juzgado Civil de Santiago, sobre reivindicación de inmueble, que sus representados siguen en contra de doña Erna Garrido Mendoza, son inaplicables las normas del Decreto Ley N° 2695 del año 1979 y, en subsidio, los artículos 2° N° 2 segunda parte; 4° inciso tercero; 15; 16; 26; 28 y 29 del mismo Decreto Ley, por ser contrarios a la garantía contemplada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Los fundamentos en que se apoya este recurso como la respuesta o defensa de la recurrida se expondrán y estudiarán, en lo que corresponda, en los respectivos considerandos de esta sentencia.

Se pidió informe al señor Fiscal y evaluándolo a fs. 16, reiteró la tesis sostenida por él en anteriores informes, siendo

* Sobre la materia vid. en esta misma Revista, tomo y sección, pp. 143-145, *González Sepúlveda*, y nota a pie de pág. 143.

de parecer de que el recurrente, puesto que se trata de una cuestión de preceptos legales con actual contradicción con la Constitución posterior, el juicio sería de competencia de los jueces de la instancia.

Se trajeron los autos

Considerando:

1° Que en el recurso por inconstitucionalidad por don Marcos Dávila presentación que señale este Tribunal declare N° 2771-91 del Nover Santiago, caratulado: *resa con Garrido Mendoza* reivindicación de inmueble las normas del artículo 19 N° 2 segunda parte; 16; 26; 28 y 29 del todo ello porque violado el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución del Estado y, en consecuencia, contrarios a la Carta Fundamental.

2° Que el recurrente al demandar su posesión sobre el inmueble son dueños padre don Moisés Garrido Mendoza solicitó su declaración de propiedad raíz que se declare con las normas del artículo 19 N° 24 del año 1979, que los cuadrados de un terreno ubicado en la comuna de esta ciudad.

Explica que el bien raíz, según correspondiente Samuel León H. fallecer el 15 de febrero de 1979, heredero testamento don Moisés de los recurrentes la actualidad de Rosario, Rep.

ra acoger un recurso de el que el recurrente haya o petición principal la total del DL N° 2.695/79 y de las normas precisas lizado, pues de igual for- lido con la exigencia de ontenida en el artículo 80 ón que señala que la Cor- drá declarar inaplicable iculares todo precepto le- i Constitución.*

Dávila Letelier, abogado, calle Huérfanos N° 1117 presentación, según man- ña, de Teresa Tunis Kö- is, Miguel Schoj y Daniel mbros de la sucesión que- nto de su padre don Moi- itz, todos comerciantes micilio, ha deducido re- bilidad para que se de- l juicio ordinario Rol oveno Juzgado Civil de eivindicación de inmue- sentados siguen en con- Garrido Mendoza, son ormas del Decreto Ley 1979 y, en subsidio, los segunda parte; 4° inciso 16; 28 y 29 del mismo ser contrarios a la ga- lia en el N° 24 del ar- titución Política de la

os en que se apoya este puesta o defensa de la idrán y estudiarán, en en los respectivos con- sentencia.

al señor Fiscal y eva- eiteró la tesis sosteni- iores informes, siendo

d. en esta misma Revista, 145, González Sepúlveda, y

de parecer de que el recurso es improce- dente, puesto que se trataría en la espe- cie de una cuestión de derogación tácita de preceptos legales comunes por su even- tual contradicción con normas de una Constitución posterior, materia que a su juicio sería de competencia o resolución de los jueces de la instancia.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1° Que en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto a fs. 3 por don Marcos Dávila Letelier, en la re- presentación que señala, se solicita que este Tribunal declare que en los autos Rol N° 2771-91 del Noveno Juzgado Civil de Santiago, caratulados "Tunis König, Te- resa con Garrido Mendoza, Erna", sobre reivindicación de inmueble, son inaplica- bles las normas del Decreto Ley N° 2695 o, en subsidio, que lo son los artículos 2° N° 2 segunda parte; 4° inciso tercero; 15; 16; 26; 28 y 29 del mismo cuerpo legal, todo ello porque violan la garantía del de- recho de propiedad que consagra el ar- tículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado y, en consecuencia, resultan contrarios a la Carta Fundamental;

2° Que el recurrente expresa, al fun- damentar su presentación, que sus repre- sentados son dueños, por herencia de su padre don Moisés Tunis Horowitz, de la propiedad raíz que doña Erna Garrido Mendoza solicitó sanear para sí de acuer- do con las normas del Decreto Ley N° 2695 del año 1979, que alcanza a 59 metros cuadrados de un inmueble de mayor ex- tensión ubicado en la calle General Mac- kenna de esta ciudad de Santiago.

Explica que el primitivo dueño de ese bien raíz, según inscripción de dominio correspondiente al año 1951, fue don Samuel León Horowitz Tunis, quien al fallecer el 15 de febrero de 1971 dejó como heredero testamentario universal al nom- brado don Moisés Tunis Morowitz —padre de los recurrentes y también fallecido en la actualidad— que residía en la ciudad de Rosario, República Argentina. Agrega

que en dicha propiedad se habrían cons- truido varias habitaciones que se arren- daban a distintas personas y de cuya ad- ministración se encargó a un estudio de abogados de Santiago, quienes rindieron cuenta a sus dueños por varios años has- ta que, ya en 1981, les informaron de atra- sos e irregularidades en el pago de las rentas; que, ante ello, decidieron liquidar esa propiedad raíz y al venir a Chile y requerir los títulos de dominio para pro- ceder a la venta descubrieron que los arrendatarios —entre ellos la demandada del juicio en que incide este recurso— ha- bían solicitado inscribir a sus nombres el retazo que ocupaban utilizando para ello el procedimiento establecido en el Decre- to Ley N° 2695 y, por cierto, falseando la verdad en las declaraciones que debieron presentar al Ministerio de Tierras y Bie- nes Nacionales. Sostienen que al contes- tar la demanda de reivindicación y cancelación de la inscripción deducida por ellos en el Noveno Juzgado Civil de Santiago ya referida, la demandada ha opuesto la excepción de prescripción especial esta- blecida por los artículos 26, 28 y 29 del referido Decreto Ley N° 2695 y es por tal razón que se ha interpuesto este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando que ésta se declare, pues todas las normas de ese cuerpo legal —especialmente las citadas en la petición subsidiaria— son contrarios a la Carta Fundamental en cuanto ésta garantiza el derecho de propiedad, precisamente con- sagrado en su artículo 19 N° 24;

3° Que al contestar el traslado conferi- do en autos, la parte de doña Erna Garri- do Mendoza solicita que se declare tanto su inadmisibilidad como su rechazo por- que, para lo primero, estima improceden- te el presente recurso por tratarse de una norma legal anterior a la vigencia de la Constitución Política de la República de 1980 y, por tanto, en la especie se trata- ría de un asunto de supervivencia o dero- gación de una ley, lo que corresponde re- solver a los jueces de la instancia en la oportunidad procesal respectiva; y para lo segundo, esto es, su rechazo sobre el fondo, porque la regularización del domi-

nio de que se trata se materializó conforme a las normas legales correspondientes, cumpliéndose todos los requisitos y trámites exigibles y, a la fecha, los plazos señalados en los artículos 26 y 29 del Decreto Ley N° 2695 se encuentran prescritos;

4° Que la norma de rango superior que se estima contradicha por los diversos preceptos que se indican del Decreto Ley N° 2695, es la del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, cuyo texto asegura a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social". "Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental". "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador;

5° Que, por su parte, los artículos del Decreto Ley N° 2695 que se dicen contrarios a esta norma, establecen en lo sustancial, lo siguiente;

El artículo 2° N° 2, que para ejercitar el derecho a que se refiere esa ley, no será obstáculo "la circunstancia de que existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble".

El artículo 4° inciso tercero, se refiere a que, "El hecho de existir una inscripción anterior que ampare el inmueble, no significará que el poseedor material esté reconociendo dominio ajeno, sin perjuicio de los derechos del titular de esa inscripción contemplados en el Título IV de la presente ley".

Los artículos 15 y 16 dicen relación con los efectos de la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, señalando que el interesado adquiere la calidad de poseedor regular del inmueble fijándose el plazo de un año para adquirir el dominio por prescripción, señalándose también la prescripción en igual plazo de las acciones emanadas de los derechos de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas; como asimismo, la cancelación por el solo ministerio de la ley de las inscripciones de dominio anteriores sobre el inmueble, así como las de los otros derechos reales antes mencionados, como también de los gravámenes y prohibiciones que lo afectaban.

Por último, el artículo 26 se refiere al plazo que tienen los terceros para ejercitar las acciones de dominio que estimen asistirles; y los artículos 28 y 29 dicen relación con la acción de compensación en dinero a que tienen derecho los terceros que acrediten dominio sobre el inmueble y que no pudieron ejercer oportunamente las anteriores acciones de dominio;

6° Que los preceptos resumidos precedentemente, que conforman esta legislación especial que se contiene en el Decreto Ley 2695, no sólo abrogan las normas sobre posesión y dominio establecidas en el Código Civil, suprimiendo las garantías de la posesión inscrita que constituye presunción de dominio y que son la base de la actual organización social y económica del país, sino que contravienen el artículo 19 N° 24 de la Constitución, transcrito en lo pertinente en el considerando 4°, ya que permiten que el titular de un derecho de propiedad sobre un bien raíz legalmente inscrito a su favor sea privado de lo suyo sin expropiación previa y en beneficio de otro que sólo detenta su posesión material;

7° Que la contradicción o pugna existente con la norma constitucional no sólo está patente en relación a los preceptos legales mencionados por el recurrente, sino que alcanza también al Decreto Ley N° 2695 en su contexto general, en cuyas declaraciones preliminares que motivan su dictación, se dice que "se ha creado un sistema que la legislación ha denominado

"faneamiento del dominio de propiedad", que tiene por objeto cambiar la situación del poseedor que carece de títulos o que los tiene, y "que la legislación en la materia no ha permitido ser eficaz al problema, por lo que es necesario modificarla, adecuando la ley actual y estableciendo un procedimiento que dé facultad administrativa para la inscripción de los predios a los poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos en la ley, y temple la intervención judicial sólo en los casos de oposición o para garantizar los derechos de los terceros"; de manera que, el Decreto Ley crea un procedimiento de carácter substantivo procesal cuyos objetivos son inequívocamente a la inscripción, constitucionalmente a la titular de este derecho debidamente inscrito.

8° Que, por último, se que para resolver el caso, ningún obstáculo recurrente haya planteado la inaplicabilidad del Decreto Ley N° 2695, pues de igual modo con la exigencia de la ley, la de las normas preceptuadas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, que señala que "podrá declarar la inaplicabilidad de la ley en los casos particulares to-

Por estas consideraciones, en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, de esta Corte sobre el curso de Inaplicabilidad del artículo 22 de marzo de 1971 de esta especie de del escrito de fs. 3 Letelier en representación de don Moisés Letelier declaran inaplicable la ley.

El interesado adquiere la calificación regular del inmueble a favor de un año para adquirir por prescripción, señalándose la prescripción en igual plazo de las emanadas de los derechos de fructo, uso o habitación, servidumbres y el de hipotecas; como cancelación por el solo milímetro de las inscripciones de derechos sobre el inmueble, así como otros derechos reales análogos, como también de los gravámenes que lo afectaban. El artículo 26 se refiere a los terceros para ejercer derechos de dominio que estimen que los artículos 28 y 29 dicen a la acción de compensación y tienen derecho los terceros en dominio sobre el inmueble a ejercer oportunamente acciones de dominio.

receptos resumidos precisan y conforman esta legislación. Se contiene en el Decreto que sólo abrogan las normas de dominio establecidas en la ley, suprimiendo las garantías inscritas que constituyen el dominio y que son la base de la organización social y económica, sino que contravienen el artículo 19 N° 24 de la Constitución, lo pertinente en el caso que permiten que el título de propiedad sobre el inmueble inscrito a su favor lo suyo sin expropiación en beneficio de otro que sólo es material;

radicación o pugna existencial constitucional no sólo se relaciona a los preceptos de la ley, sino por el recurrente, también al Decreto Ley N° 2695, en cuyo texto general, en cuyas minutas que motivan que "se ha creado un sistema que ha denominado

"saneamiento del dominio de la pequeña propiedad", que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos, y "que la legislación vigente sobre esta materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de los poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos en la ley, y que contemple la intervención de la Justicia Ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros"; de manera que, en su totalidad, el Decreto Ley crea un sistema tanto de carácter substantivo como de índole procesal cuyos objetivos y efectos conducen inequívocamente a privar de su dominio, constitucionalmente garantizado, al titular de este derecho, sobre su propiedad debidamente inscrita; y

8° Que, por último, cabe hacer presente que para resolver en la forma que se hará, ningún obstáculo significa el que el recurrente haya planteado como petición principal la inaplicabilidad total del señalado Decreto Ley N° 2695 y en subsidio la de las normas precisas que se han analizado, pues de igual forma se ha cumplido con la exigencia de admisibilidad contenida en el artículo 80 de la Carta Fundamental que señala que la Corte Suprema "podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución".

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre substanciación del Recurso de Inaplicabilidad de las Leyes, de 22 de marzo de 1932, se acoge el recurso de esta especie deducido en lo principal del escrito de fs. 3 por don Marcos Dávila Letelier en representación de los herederos de don Moisés Tunis Horowitz, y se declaran inaplicables en el juicio Rol

N° 2771-91 del Noveno Juzgado Civil de Santiago, caratulado "Tunis König, Teresa con Garrido Mendoza, Erna", sobre reivindicación de inmueble, los artículos 2° N° 2 segunda parte; 4° inciso tercero; 15; 16; 26; 28 y 29 del mismo Decreto Ley N° 2695, publicado en el Diario Oficial de 21 de julio de 1979.

Se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretado a fs. 9.

Acordada después de haberse desechado la indicación previa de los Ministros señores Faúndez, Araya y Garrido, quienes estuvieron por declarar inadmisibile el presente recurso porque, en su concepto, la pugna que se denuncia entre las normas del Decreto Ley N° 2695 y la Constitución Política de la República de 1980 es una materia que dice relación con la derogación tácita de una ley anterior y de rango inferior al constitucional, lo cual debe ser resuelto por los jueces de la instancia en la oportunidad procesal que corresponde, siendo improcedente, entonces, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido en estos autos.

Acordada contra el voto de los Ministros señores Faúndez, Perales, Alvarez, Correa, Garrido y Hernández, quienes estuvieron por rechazar el presente recurso porque, a su juicio, las disposiciones del Decreto Ley N° 2695 no vulneran ni son contrarios a la garantía señalada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Tienen para ello en consideración:

1° Que la norma constitucional recién mencionada, que garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales, también preceptúa que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social";

2° Que el Decreto Ley N° 2695 contiene precisamente un conjunto armónico de disposiciones especiales encaminadas a regularizar o sanear el dominio de la pe-

queña propiedad raíz, con el propósito como se expresa en la exposición de motivos de ese cuerpo legal: "De regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o que los tiene imperfectos"; añadiendo: "que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo cual es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultades a la autoridad administrativa para ordenar la inscripción de los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos por la ley, y que contemple la intervención de la justicia ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de los terceros";

3° Que el mencionado Decreto Ley N° 2695 como puede advertirse, se orienta a regir situaciones especiales, respecto de las cuales no cabe aplicar las disposiciones ordinarias de la legislación civil, en particular las que comprenden la denominada "Teoría de la posesión inscrita", que postula que la inscripción de un inmueble constituye garantía, requisito y prueba de la posesión, conforme a lo que fluye de los artículos 686, 696, 702, 724, 728, 730 inciso final, 924 y 2505 del Código Civil, disposiciones que por cierto no están revestidas de rango constitucional, de modo que nada impide al legislador modificarlas o apartarse de ellas en situaciones especiales, creando un estatuto de normas de aplicación particular por razones de interés público general, como acontece con el indicado cuerpo legal;

4° Que, en efecto, en conformidad a la normativa especial establecida en el referido Decreto Ley N° 2695, para obtener el reconocimiento de poseedor regular y quedar en situación de sanear la propiedad del correspondiente inmueble y adquirir su dominio por la prescripción adquisitiva que regula, no constituye obstáculo la circunstancia de que existan inscripciones anteriores sobre el mismo inmueble;

5° Que, por lo demás, cabe resaltar que los preceptos del Decreto Ley N° 2695 que

reprochan de inconstitucionales no establecen una modalidad para adquirir el dominio que se aparte enteramente de la que para la prescripción adquisitiva tiene el Código Civil, puesto que además de la posesión material del predio, de menos de cinco años, se requiere también posesión regular, que se otorga mediante la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, situación que por ende, habilita para adquirir el dominio del inmueble por prescripción una vez transcurrido un año desde la fecha de aquella inscripción; y

6° Que, en consecuencia, esta modalidad especial de adquirir el dominio de ciertos bienes raíces resulta acorde con lo que preceptúa el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, en cuanto por dicha norma se entrega a la ley el establecimiento de los modos de adquirir la propiedad de los bienes corporales e incorporeales, de lo que se sigue que su aplicación no puede llegar a constituir una forma de despojo o privación del dominio, sino que, por el contrario, tal modo de adquirirlo está en armonía con la normativa legal y constitucional que faculta su adquisición.

Agréguese copia de esta resolución a los autos en que incide este recurso, tenidos a la vista, y devuélvanse a su tribunal de origen.

Regístrese y archívese.
N° 18.728.

Pronunciada por el Presidente don Marcos Aburto O., y los Ministros señores Servando Jordán L., Enrique Zurita C., Osvaldo Faúndez V., Lionel Béraud P., Arnaldo Toro L., Efrén Araya V., Marco Aurelio Perales M., Germán Valenzuela E., Hernán Álvarez G., Oscar Carrasco A., Luis Correa B., Mario Garrido M., y Víctor Hernández R.

Corte Suprema, 25 de
Corte de Apelaciones d
(20 de abril de

Inmobiliaria Plazue
Limitada y otra con Dir
Municipales de P
(recurso de pro

Resolución municipal
ducado permiso de edifi
transcurrido tres años s
do obras de construcción
- Ordenanza General c
Construcciones (art. 5.1
cido por DS/Minvu 90, c
ilegal y arbitrario - I
hechos invocados como
tivo de la decisión - Pr
obras - Ejecución del
vencer término de cada
de terrenos para constr
sonas - Ley General de
trucciones (DFL/Minvu
dificado por Ley 19.0
sanción y juez compe
de infracciones a ley).

MEDIDA DE PROTECC
to resoluciones que
permisos de edificaci

DOCTRINA: Es arbit
solución de la autor
que ha sido dictada
de hecho inexistente
den las circunstancias
apoya.

Declarar caduca
edificación sin que e
perturba y priva el
los derechos recono
ción en su artículo

* Sobre construcción
construir, paralización
urbanismo, vid. en es
Terminal de Buses Los
(con comentario); Villa
102-109 y nota en pág
(Las Condes/Stgo.), í
316, y Spotorno Oyaz